

Comunicación de datos de compradores. Informe 55/2007

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a la empresa productora de un determinado producto de los datos identificativos de quienes adquirieron el mismo a través de la consultante, a fin de que la productora se ponga en contacto con aquéllos y retire los artículos adquiridos, al haberse detectado en los mismos un fallo en sus condiciones de estanqueidad que pudiera provocar daños en las personas.

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a), cuando una norma con rango de Ley otorgue cobertura a la comunicación. Del mismo modo, conforme al artículo 11.2 c) la cesión será posible sin contar con el citado consentimiento “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”, si bien, “en este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique”.

Tal y como se describe a lo largo de la consulta, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece una serie de derechos de los consumidores, así como las correlativas obligaciones impuestas a los productores y distribuidores de los bienes adquiridos.

De este modo, como se indica en la citada consulta, el artículo 5.2 g) de la Ley impone al fabricante la obligación “de retirar o suspender, mediante procedimientos eficaces, cualquier producto o servicio que no se ajuste a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas”, habida cuenta que el artículo 2.1 a) reconoce el derecho del consumidor a la protección “contra los riesgos que puedan afectar a su salud o su seguridad”. Igualmente, el artículo 25 añade que “El consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos o servicios les irroguen salvo que aquellos

daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente”.

Como también se indica en la consulta, la Ley 26/1984 se encuentra actualmente desarrollada, en lo que a la prevención de la seguridad en el consumo se refiere, por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos.

El artículo 4.3 b) del citado Real Decreto dispone que “dentro de los límites de sus respectivas actividades y en función de las características de los productos, los productores deberán (...) cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos que presentan para el consumidor riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, adoptar, sin necesidad de requerimiento de los órganos administrativos competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicación de avisos especiales, retirar los productos del mercado o recuperarlos de los consumidores”.

A su vez, el Real Decreto impone una serie de obligaciones de comunicación a las autoridades administrativas de la existencia de la situación de riesgo mencionada.

Por su parte, el artículo 5.3 añade que “dentro de los límites de sus actividades respectivas, participarán en la vigilancia de la seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto (...) colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los órganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos”.

Según se indica en la consulta, se han adoptado las medidas de publicidad precisas para dar a conocer la existencia del defecto en el producto al que se refiere la consulta que puede dar lugar a la producción de daños en las personas, habiéndose producido la retirada del mercado de los productos defectuosos. No obstante, a fin de poder proceder a la retirada de los productos ya adquiridos, se solicitan del productor al distribuidor consultante los datos relativos a los adquirentes del citado producto.

La adquisición del producto da lugar al nacimiento de una relación jurídica entre el consumidor y el distribuidor de aquél sometida a las normas que garantizan la seguridad y, en su caso, integridad del consumidor y que aparecen reguladas por las normas que se han venido reproduciendo.

Si bien el productor no es parte directa en la citada relación si puede aparecer obligado por la misma, bien mediante la constitución de la garantía legalmente exigible, bien mediante el obligado cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para garantizar la mencionada seguridad del consumidor. Precisamente por ese motivo, el Real Decreto 1801/2003 viene a imponer al

productor una serie de obligaciones que permitan garantizar, en caso de existir un riesgo para la seguridad del consumidor, la retirada del producto no sólo en el mercado, sino incluso en relación con aquellos que ya hubieran sido adquiridos.

En consecuencia, la relación derivada de la adquisición del producto no se extingue como consecuencia de la adquisición, existiendo una serie de deberes legales que deberán cumplirse con posterioridad al citado momento, garantizándose un adecuado seguimiento o control de la citada relación jurídica.

Ello implica que cuando los citados deberes incluyen la exigencia de proceder a la retirada del producto adquirido como consecuencia de la detección de riesgos graves para sus adquirentes el productor o fabricante deba no sólo dar a conocer la existencia de dichos riesgos, permitiendo así una conducta activa del consumidor que mediante la devolución eluda la producción del riesgo, sino igualmente deba adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar la recuperación del producto del consumidor que lo adquirió.

De este modo, si el productor tuviera conocimiento de los datos de los adquirentes deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la retirada. Igualmente, de las obligaciones impuestas al mismo se desprende que deberá adoptar todas las medidas que diligentemente le permitan identificar al adquirente para llevar a cabo la retirada del producto.

Al propio tiempo, el distribuidor deberá adoptar las medidas necesarias para colaborar con el productor en la disminución del riesgo potencial que pudiera causar el producto por él comercializado.

De este modo, sin entrar a analizar si la cesión planteada podría encontrar efectivamente cobertura en las habilitaciones legales derivadas del tenor de la Ley 26/1984 no cabe duda que la comunicación por el distribuidor al productor de los datos de los consumidores finales de los que tenga conocimiento ha de considerarse necesaria para el adecuado mantenimiento, seguimiento y control de la relación jurídica generada como consecuencia de la adquisición del producto defectuoso.

Por ello, la cesión se encuentra amparada por el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, no siendo en consecuencia contraria a la misma y no incurriéndose en ningún tipo de infracción como consecuencia de la cesión.